

# Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Sábado 2 de Ma

Año de 1957.

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia (Ley de 3 de noviembre de 1857.)

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales se han de remitir al Jefe político respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos. (Real orden de 6 de abril de 1859.)

Num. 103

## PARTE OFICIAL.

### GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina nuestra Sra. (q. D. g.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

#### Circular número 136.

La administración principal de Hacienda pública de esta provincia con fecha de ayer me dice lo siguiente:

«La dirección general de contribuciones en orden de 14 del que espira me recomienda la necesidad de adoptar medidas eficaces para conseguir la extinción de los cuantiosos descubiertos que existen en esta provincia por las contribuciones e impuestos suprimidos al establecimiento del nuevo sistema tributario: y me encarga, entre otras cosas, que para remover los obstáculos que a ello se opongan, reclame de los ayuntamientos y autoridades municipales los auxilios que necesite, tanto para estrechar a los deudores, como para instruir los competentes expedientes de baja, de las partidas que no pueden hacerse efectivas, impetrando para todo la autoridad de V. S.; y como los procedimientos que han de entablarse tienen que ser de oficio, se ha tropezado con el inconveniente de no encontrarse comisionados de apremio que se encarguen de la instrucción de aquellos expedientes, cuya dificultad ha surgido siempre que se ha promovido por la administración la realización de muchos descubiertos, siendo esta la principal razón que motiva su existencia. Y estando en el interés de los ayuntamientos hacer desaparecer tan envejecidos débitos para ponerse a cubierto de la responsabilidad que todavía pudieran afectarlos, si no se justifican debidamente que se habrían empleado en tiempo oportuno por dichas corporaciones los medios mas eficaces para la extinción, ningún auxilio mas apropiado pudieran prestar, y están en el deber de hacerlo, que el de facilitar de entre sus dependientes el número de alguaciles ó comisionados que sea necesario para la instrucción de los mencionados expedientes, y á fin de que atiendan la reclamación que con este objeto he dirigido á algunos por conducto de los administradores subalternos, he de merecer de la atención de V. S. se sirva insertar una orden circular en el «Boletín oficial» de la provincia previniendo á todos los ayuntamientos que se hallan en el caso de

tener débitos de aquella procedencia, que siéndoles reclamado por los administradores subalternos el auxilio de comisionados de apremio, faciliten el número necesario en proporcion al de deudores, para que simultáneamente se instruyan los expedientes ejecutivos á la baja en los términos que tengo indicado á dichos funcionarios, pues de este modo, además de practicar un servicio importante, evitarán que recaiga sobre la masa general de contribuyentes de cada pueblo, el pago de los descubiertos, si no se justificase que la existencia de ellos es producida por causas ajenas á la voluntad de dichas corporaciones, á cuyo cargo estuvo la recaudación en las épocas de sus vencimientos.»

En su consecuencia, recomiendo muy eficazmente á los señores alcaldes, presidentes de los ayuntamientos de esta provincia, cuyas municipalidades se hallen en el caso de que se trata, cuiden de facilitar á los administradores subalternos de rentas de los mismos pueblos, el auxilio de comisionados y toda la cooperación que sea conducente al mejor éxito de este importante servicio. Del recibo de la presente y de quedar en darle el debido cumplimiento, se servirá V. S. darme aviso á correo seguido.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Cádiz 1.º de mayo de 1857.—Manuel Cano.—Señor alcalde constitucional de.....

#### Estadística.—Circular núm. 138.

El art. 15 de la instrucción de 14 de marzo último dictada para llevar á efecto el Real decreto de la misma fecha disponiendo la formación de un censo general de toda la población del reino, dice: «A los treinta días de instaladas las juntas municipales deberán hallarse concluidas las operaciones preparatorias, lo que pondrán los alcaldes en conocimiento del gobernador de la provincia.»

Cuyo artículo creo conveniente recordar á los señores alcaldes, como presidentes de dichas juntas, para su mas exacto cumplimiento; ordenándoles al propio tiempo que remitan el avisos por veredero, y en el mismo día en que concluya el término señalado, en el concepto de que debiendo llevarse á efecto la inscripción en el mes de mayo actual, no toleraré demora ni falta alguna, y exigirá por ello la responsabilidad marcada en la misma instrucción.

Cádiz 1.º de mayo de 1857.—Manuel Cano.

#### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

##### Subsecretaría.—Negociado 2.º

Remitido á informe del consejo Real el expediente de autorización para procesar á Diego Capilla Leon, alcalde de la cárcel de Bujalance, por suponersele faltas co-

metidas en el ejercicio de su cargo, ha consultado lo siguiente:

«El consejo ha examinado el expediente en que el juez de primera instancia de Bujalance pide autorización para procesar á Diego Capilla Leon, alcalde de la cárcel de la expresada ciudad.

Resulta que en 19 de diciembre de 1836 el juez de primera instancia dió un auto de oficio para averiguar la conducta que habia observado el alcalde Capilla, recibiendo como detenido en la cárcel á Pedro Martínez, en virtud de disposición del alcalde, sin haberlo puesto en conocimiento del juzgado.

Recibióse indagatoria al alcalde, y en ella dijo, que estando acostado en la noche del 16 del expresado mes, á cosa de las doce, llamó el alcalde al declarante y le dijo que allí se quedaba Pedro Martínez hasta que él volviera; que en efecto volvió á cosa de un cuarto de hora y lo mandó pusiera en libertad al detenido, á quien preguntó si se habia refrescado, sin que el alcalde le dijera quedaba como detenido cuando se lo llevó; que el alcalde no le habia dado mandamiento de prisión.

Pedro Martínez declaró que en la noche del 16 iba con su hermano, á cosa de las diez, por la calle de las Monjas; vieron ir hacia ellos tres hombres emborrachos, á quienes dejaron pasar; que á poco uno de ellos se volvió y preguntó al declarante que á donde iba, á lo cual le contestó reiteradamente que nada le importaba; que entonces aquella persona se desahozó, y habiendo conocido ser el alcalde, se quitó el sombrero y le dijo que perdonara; que entonces el alcalde le dijo era un botracho palabrero y le llevó á la cárcel, diciéndole al alcalde que quedaba bajo su responsabilidad; que á cosa de la una volvió el alcalde acompañado del alguacil Juan Serrano y le puso en libertad.

Don José Valera, alguacil mayor de la alcaldía, confirmó lo dicho por el alcalde, así como el alguacil Juan Serrano.

El juez pidió al alcalde información acerca del arresto. Su contestación fue que, hallándose patrullando en la referida noche, á cosa de las once, se encontró dos hombres emborrachos; que les preguntó de donde venían y le respondieron que de beber un trago de vino; que después de haber tenido varias contestaciones con uno de ellos, Pedro Martínez, viendo que estaba ebrio, con el fin de evitar un lance desagradable, le llevó á la cárcel á casa del alcalde hasta que se refrescase; que después le suplicaron los hermanos del detenido la pusiera en libertad lo que ejecutó, sin que aquello tuviera carácter de arresto ó prisión.

Pidióse por el juez autorización para proceder contra el alcalde, y el gobernador la negó previa audiencia del interesado y consejo provincial.

Visto el art. 69 del reglamento de juzgados de primera instancia, en que se autoriza á los alcaldes de las cárceles para recibir en clase de detenidos á las personas que la autoridad competente les entregue, pero dando cuenta al juzgado de primera instancia:

Visto el art. 295, párrafo tercero del código penal, en que se impone la pena de suspensión y multa al alcalde que recibiera en la cárcel en concepto de dete-

nida ó presa á una persona sin los requisitos prevenidos por la ley:

Considerando que el alcalde de Bujalance no entregó al alcalde á Pedro Martínez como preso sino como detenido momentáneamente, por medida gubernativa, en lo cual dicho alcalde no ejerció funciones de su oficio, sino que estuvo considerado como un particular á quien se encarga una comisión del servicio, y que, como consecuencia de ella, no tuvo necesidad de poner en noticia del juzgado la determinación;

El consejo opina pudiera V. R. servirse consultar á S. M. se confirme la negativa dada por el gobernador de Córdoba.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por el consejo, de Real orden le comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de abril de 1857.—Nocedal.

Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba.

##### Subsecretaría.—Negociado 2.º

Remitido á informe del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á don José Rafael Guerra, Gobernador que fué de la provincia de Valladolid, por suponersele abuso de autoridad, ha consultado lo siguiente:

«El Consejo ha examinado el expediente en que el Supremo Tribunal de Justicia pide autorización para procesar á D. José Rafael Guerra, Gobernador que fué de Valladolid:

Resulta de los antecedentes, que en causa seguida al Comandante, Mayor, capataz y farriel del presidio de la referida ciudad, y contra varios presidiarios por falsificación de testimonios de condenas y estefas atribuidas al encargado de las altas y bajas del personal, y por licenciamiento indebido de cinco confinados de que se culpaba á los primeros, se dictó sentencia definitiva en 23 de noviembre de 1854, en la cual, entre otras cosas, se mandó sacar información de ciertas informalidades cometidas por el Gobierno civil de la provincia, en lo relativo al servicio de presidios, y se remitiera al Gobierno para que adoptara la disposición á que hubiere lugar:

Por Real orden de 4 de octubre de 1855 se mandó por el ministerio de Gracia y Justicia al Supremo Tribunal una certificación de los hechos, que le habia sido remitida por la Audiencia. El Fiscal opinó que aquellos antecedentes no eran bastantes para formar juicio acerca del asunto, y propuso se pidiera un testimonio de lo que de la causa resultara, con relacion á las dependencias del Gobierno de provincia, sobre expedición de licencias y pasaportes:

Acordóse así por el Supremo Tribunal, y la Audiencia de Valladolid remitió un testimonio en que estaba comprendida la sentencia que recayó en la causa de que queda hecho mérito. Acom-

padóse también testimonio de un oficio del Mayor del Establecimiento al Comandante del mismo, su fecha 14 de octubre de 1852, cuyo oficio dió origen a la formación de la causa. En dicho oficio le daba parte de haber practicado un inquisitorio reconocimiento en las condenas y registros de la oficina, de cuyo exámen resultó echar de menos los expedientes de tres confinados licenciados, y que en uno, de otro que también lo había sido en 7 de marzo del mismo año, resultaba no constar en él nota alguna de haber sido propuesto para indulto ni para licencia absoluta; y habiendo sido condenado en 28 de noviembre de 1815 á ocho años de presidio, así como Francisco Prieto y José Gonzalez, sus consortes, habían sido licenciados indebidamente, faltándoles para extinguir sus condenas 20 meses y 23 días; que Juan Rincón Dominguez, cuyo expediente no aparecía en el archivo, y había sido licenciado en 7 de febrero, le restaba para extinguir su condena un año, ocho meses y cinco días; que sin duda en las innumerables propuestas de licenciamiento que con motivo del indulto se hacían al Gobernador, lograron sorprender la firma al Jefe de la Mayoría y Comandancia; que se debía reclamar de las oficinas del Gobierno de provincia las copias de las hojas penales de los indebidamente licenciados para confrontarlas con una original, procediéndose á lo que hubiere lugar.

El Comandante del presidio, en 14 de octubre, comisionó al Ayudante para que formara sumaria en averiguación de los hechos. Instruyéronse en efecto las primeras diligencias, y se pasaron al Gobernador en virtud de reclamación, que para el efecto hizo, y después las transmitió en 17 de octubre, al Juez de primera instancia para su continuación.

Pidióse por el Juez la prisión de los reos, y que se unieran á la causa los pasaportes y licencias, lo que se verificó. Ambos documentos estaban autorizados por el Gobernador D. José Rafael Guerra, y al respaldo de las licencias se hallaban puestas las certificaciones de ajuste formadas por la Mayoría del presidio, y autorizadas y visadas por el Mayor y Comandante.

Reclamóse del Gobierno de provincia certificación de lo que en el registro que debía llevar en aquellas oficinas resultara con respecto al alta y baja de los confinados indebidamente licenciados, y de sí en vista de la propuesta del licenciamiento que debió remitir el Comandante del presidio, se verificó el confronto, remitiendo también las conculcadas comunicaciones.

Certificóse por dicha Secretaría que no se habían llevado los registros de alta y baja de penados hasta 1837 en que se autorizó los que existen; que en ellos no aparecían como altos los sus dichos confinados, por sí como bajas; que no se confrontaron las propuestas de licenciamiento con los registros, porque en la Mayoría del presidio se llevaban con arreglo al art. 263 de la ordenanza, de las vicitudes de los penados, y era lo que formaba la hoja histórico-penal.

Acompañáronse las propuestas originales para el licenciamiento autorizadas y visadas por los Jefes del presidio, con las hojas histórico-penales en que se demostraba la falsificación.

Después de la acusación fiscal en que se pidieron varias penas contra los procesados, uno de ellos D. Matías Laplana, Mayor que había sido del presidio, en su escrito de defensa, culpó al Gobierno civil de omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes, y en corrección de ello presentó un interrogatorio reducido á que por el Gobierno de provincia: habían dado licencias á confinados que, habiéndose debidamente propuestos, estaban recurridos de pena, de

cuyas condenas no se había tomado razón, á pesar de haberse remitido á dichas oficinas los testimonios originales, por una razón el Mayor devolvió algunas licencias para que se rectificasen; que publicado el indulto de diciembre de 1851, el Gobernador apremiaba á las oficinas del presidio para que todos los días propusieran el mayor número de licencias posibles; que algunas veces se daban pasaportes por el Gobierno civil directamente á los confinados licenciados sin intervención de las oficinas del establecimiento; que ocurrió algún caso de expedirse pasaportes con anticipación á las licencias, remitiéndose estas reunidas en número de 20 ó 30, según las despachaban; y por último, que habiéndose trasladado el presidio al edificio de Prado, no tuvo Laplana más auxiliares que presidiarios para trasladar el Archivo.

A la primera pregunta contestaron afirmativamente cinco testigos, pero sin precisar la época en que ocurrió el suceso; á la segunda también contestaron afirmativamente cuatro testigos de ciencia propia y uno de oídas; en la tercera declararon tres testigos lo en ella contenido; cuatro para la cuarta, y todos los testigos presentados en lo tocante á la última:

El Fiscal del Supremo tribunal, en vista del anterior testimonio, dijo que además del abandono de los Jefes del presidio de Valladolid habían incurrido en el mismo defecto las oficinas del Gobierno de aquella provincia, supuesto que cuando en ella se presentaron las propuestas para el licenciamiento de los cinco confinados, acompañadas de las hojas histórico-penales, no los confrontaron con los libros de alta y baja que se debían haber formado desde que se creó en 1817; que si la Autoridad administrativa hubiera velado por el buen orden de sus oficinas, no habría llegado al caso de suscribir unas licencias que no se podían expedir; pero que si bien esta omisión á falta en el Jefe de las oficinas del Gobierno de provincia es reprehensible y digna de corrección disciplinaria, no se podía reputar como delitos, supuesto no resultaba ni la mas leve sospecha de que se hubiese procedido con ánimo de falsificar á los confinados sus licencias; que si en esto no se podía exigir responsabilidad al Gobernador Guerra, hay otros hechos para cuya investigación es indispensable proceder instruyendo la correspondiente causa, supuesto que no consisten en la simple inobservancia de las leyes, sino en excesos y abusos de gravedad, que tales hechos sin el haberse expedido licencias por el Gobierno de provincia á penados penales de recargos que no constaban en aquellas oficinas; la urgencia con que Guerra quería se expidiesen licencias, enviando el mismo pasaportes á los confinados, sin haberlos expedido las licencias y sin intervención de las oficinas del presidio, cuidando de enviar asimismo á los respectivos Alcaldes; que todo esto era justiciable, y por lo tanto se debería peticionariamente su ratificación al Gobierno para proceder, lo que acordó el Tribunal en 1.º de diciembre de 1855, y por Real orden de 10 de enero de 1856 pasó al Tribunal Supremo Contencioso-administrativo para informarse.

Vista la ordenanza de presidios de 14 de abril de 1831 en sus artículos 37, por la que los subdelegados de Fomento, hoy Gobernadores civiles, son en sus respectivas provincias los jefes superiores de los depósitos correccionales y presidios establecidos en ellos; el 28.º de la disposición 1.ª, que les impone la obligación de cuidar que se cumplan las ordenanzas, y 2.ª, según la cual deben llevar cuenta exacta de la alta y baja de los penados, así como las condenas de los mismos; el 282, según el cual las condenas originales se han de archivar en la

mayoría del presidio; el 309, que proviene se instruyan los expedientes de licencias en las mayorías cuatro meses antes del cumplimiento de la condena para que los penados las reciban el mismo día que espiran aquellas, bajo la responsabilidad de los comandantes.

Vista la orden del gobierno provisional de 3 de octubre de 1843, disposición 1.ª, en que se encarga á los Jefes políticos se cuiden estrictamente en la protección y vigilancia, dejando enteramente espedita la autoridad de los comandantes en todo lo relativo al régimen y disciplina interior establecido por el Gobierno.

Vista la Real orden de 15 de abril de 1844 introduciendo algunas modificaciones en el reglamento de presidios en sus artículos: 1.º, en el que se limita la autoridad de los Jefes políticos en los establecimientos presidiales al protectorado é inspección que ejercen en favor de beneficencia, instrucción pública y otros análogos, 2.º, por el que se les conservan las atribuciones que les están declaradas por los párrafos sexto y octavo del artículo 38 de la ordenanza general del ramo.

Vista la Real orden de 23 de junio de 1848, en que se previene se entregue á los confinados únicamente el pasaporte, remitiéndose á los respectivos Alcaldes las licencias para que sean archivadas:

Vistos los artículos del Código penal 313, en que se impone pena de multa al empleado que en el ejercicio de su cargo cometiere algun abuso que no esté penado en el mismo: 450, en que se impone prisión correccional ó arresto mayor al que con infracción de reglamentos cometiera un delito por simple imprudencia ó negligencia:

Considerando que, por reprehensible que pueda ser la omisión del Gobernador de Valladolid por no haber hecho cotejar las propuestas de los penados que fueron indebidamente licenciados, con las hojas histórico-penales, que originales debían estar archivadas, solo puede ser digna de corrección disciplinaria como falta, cuya enmienda está encargada á la administración; y que en el mismo caso se encuentra el hecho de haberse devuelto por la mayoría al Gobierno de provincia licencias dadas á confinados cumplidos, pero recurridos, sin que se hubiese tomado razón de dichos recargos en las oficinas, puesto que en ello no hubo abuso de autoridad, ni mala fe, ni aun sospecha de delito de que deban conocer los tribunales de justicia:

Considerando que la urgencia con que el Gobernador Guerra quería expedir las licencias y pasaportes á los penados cumplidos por el indulto que les había sido aplicado, lejos de ser una cosa vituperable, era por el contrario conforme á disposiciones legales, pues en ello no hizo mas que cumplir estrictamente con las prescripciones de la ordenanza del ramo; y es un principio de justicia que, una vez cumplida en conciencia por el confinado y satisfecha la multa pública, por ningún protesto ni motivo se le debe privar ni un momento de su libertad y del derecho de volver á la vida común bajo la protección de las leyes.

Considerando que, no solo no fué á ninguna disposición legal el Gobernador Guerra al dar los pasaportes á los confinados cumplidos sin haberlos expedido las licencias, enviando estas despachos á los Alcaldes de los pueblos, sino que, por el contrario, se atuvo en ello á la Real orden terminante que sobre la materia existe.

de Justicia solicitó.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo solicitado por el Consejo, de Real orden lo comunicó á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril de 1857.—Candido Nocedal.

Sr. Ministro de Gracia y Justicia.  
=0=

Remitido á informe del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á don Francisco Gomez, alcalde que fué de Pollos, con motivo de varias multas que impuso á dañadores de terrenos públicos y de particulares, ha consultado lo siguiente:

«El Consejo ha examinado el expediente en que el juez de primera instancia de la Nava del Rey pide autorización para procesar á don Francisco Gomez, alcalde que fué de Pollos.

Resulta que en 7 de mayo de 1836, el promotor fiscal del juzgado compareció ante el juez manifestándole que don Tomás Gonzalez y don Santiago Muriel le habían denunciado que el citado alcalde estaba imponiendo multas en metálico sin darles la aplicación prevenida por las leyes.

Formóse la correspondiente sumaria, en la que se ratificaron los denunciadores, especificando los hechos siguientes:

1.º Que en 1855 cobró de tres arriendos 70 ú 80 rs. por haber entrado con su ganado en el prado de Bayona, sin haber puesto esta cantidad en fondos públicos:

2.º Que había cobrado 10 rs. á don Fernando Rodriguez, y otros 10 á don Aquilino Escudero, por daños hechos por sus ganados sin insertarlo en el papel para el efecto establecido. Rodriguez evasó ultimativamente la cita, añadiendo que, además de los 10 rs. mencionados, habían sido exigidos á sus criados en una ocasión de 7 á 8 rs., y en otra 4. Escudero también evasó la cita en el mismo sentido; pero añadiendo que su pastor había pagado 30 rs. todo en metálico.

Cándido Gonzalez declaró haberle exigido 3 rs. en dinero. Varios testigos confirmaron las anteriores declaraciones, unas de oídas, otras de ciencia propia.

A propuesta del promotor fiscal se inhibió el juez en el conocimiento de la causa, fundado en que los Alcaldes tenían facultades para imponer multas gubernativas; que las impuestas por el alcalde de Pollos lo habían sido en este concepto, y su corrección y enmienda correspondía al gobernador como superior administrativo en la provincia.

La audiencia revocó el auto de inhibición y devolvió las diligencias para que procediese el juez con arreglo á derecho, tanto sobre la exacción de multas como sobre la forma en que fueron exigidas. El juez pidió al gobernador autorización que fué denegada. Oído el interesado y el Consejo provincial, el primero espuso que no era cierto hubiese exigido á los arrieros la multa que se decía, sino únicamente 70 rs. por daños causados en una heredad de dominio particular, cuya cantidad fué entregada al dañado, lo que acreditó con el recibo que presentó; que en cuanto á las demás multas, unas se exigieron en virtud de un bando aprobado por el jefe político en 19 de enero de 1848, y otras por la ordenanza para la conservación de las carreteras generales de 14 de septiembre de 1842. Acompañóse el bando referido, cuya fecha es en efecto la expresada, y se halla aprobado por el jefe político.

Visto el Real decreto de 14 de abril de 1848, en que se autorizaba el papel sobre daños denunciados de multas, y se prohibe á la clase de autoridades exigirlos en metálico, pasado en importa como

ingreso á la Hacienda pública.

Vista la ley de ocho de agosto de 1851 introduciendo reformas en el papel sellado, en su cap. 4.º, relativo al papel de multas, en especial en el párrafo final del art. 53, en el que se prescribió que la autoridad que exigiera multas en materia de considerarse comprendida en los artículos 326 y 327 del código penal.

Vistos los artículos antes expresados: Visto el Real decreto de 13 de mayo de 1853 en las disposiciones 2.ª, en que se facultó á las autoridades administrativas para castigar gubernativamente las faltas penales en el código con multa ó reclusión y multa, y 3.ª según la cual los alcaldes conservan la facultad de imponer las multas hasta en la cantidad que permite el art. 75 de la ley de 11 de enero de 1845, cuando se hallen establecidas en ordenanzas ó reglamentos municipales, cuya publicación sea anterior á la del código penal:

Considerando que al imponer el alcalde de Pollos las multas á que el expediente se refiere obró dentro del círculo de sus atribuciones, puesto que el bando en cuya virtud fueron impuestas, es de fecha anterior al código penal, y que si alguno escuso hubiese cometido en ello, su corrección ó enmienda corresponde á la autoridad superior gerárquica que es el Gobernador:

Considerando que al exigir las multas en metálico contraviene á disposiciones legales, y solo á los tribunales corresponde conocer en el asunto y declarar si el abuso constituye ó no delito:

El consejo opina pudiera V. E. servirse consultar á S. M. se confirme la negativa en cuanto á la imposición de las multas, y se conceda en lo relativo á haberlas exigido en metálico.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por el Consejo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de abril de 1857.—Nocedal.

Sr. Gobernador de la provincia de Valladolid.

—o—

Remitido á informe del Consejo Real el expediente sobre autorización para procesar al ayuntamiento que fué de Fonz en abril de 1856, por suponersele delito de usurpación, ha consultado lo siguiente:

El Consejo ha examinado el expediente en que el juez de primera instancia de Barbastro pide autorización para procesar al ayuntamiento que fué de Fonz.

Resulta que en 18 de abril de 1856 dió un auto de oficio el alcalde de la mencionada ciudad, haciendo constar que el apoderado de don Pablo Sabun Palacios se le había quejado de que en el monte titulado de Figueroa, propio de su principal, el ayuntamiento de Fonz había mandado abrir un camino escitando á los vecinos del pueblo que habían de ir á Barbastro para que atravesaran por él hasta encontrar el nuevo camino. En averiguación de estos hechos formó las correspondientes diligencias:

Pasó la sumaria al juzgado en 19 del expresado mes, y en el mismo día el juez recibió un oficio del alcalde de Fonz, en que le decía, que tenía entendido ser á presentar al juzgado una denuncia sobre el referido hecho; que pedia sobre el expediente en el gobierno de provincia, y se lo avisaba para que así lo tuviese entendido. El juez, sin embargo, nombró peritos que reconocieran el daño causado en la propiedad de Sabun, por disposición del ayuntamiento de Fonz, cuyo daño fué tasado en 300 rs. Tomóse declaración á dos individuos

del ayuntamiento que habían dirigido las obras de apertura del camino: ambos dijeron que habían sido comisionados por la municipalidad para recomponer un camino público que conducía á Barbastro, pasando por el monte llamado de Figueroa, el cual se hallaba obstruido por las muchas aguas, cuyo camino tiene el ayuntamiento obligación de componer, en virtud de concordia celebrada en Barbastro, cuando el terreno pertenecía á los propios de esta ciudad, aunque en la actualidad pertenece á don Pablo Sabun.

El promotor propuso que, una vez que el alcalde de Fonz había dicho existía un expediente en el gobierno de provincia, y que de su oficio se infería que lo hecho por el ayuntamiento no era un camino nuevo, sino una rehabilitación del antiguo, se pidiese al Gobernador autorización para proceder.

El juez pidió al Gobernador noticia del expediente de que el alcalde de Fonz había hablado, resultando que en efecto existía entre el ayuntamiento de este pueblo y don Pablo Sabun un proyecto de avenencia, por cuyo motivo se suspendieron las actuaciones hasta ver su resultado.

Después de algun tiempo, el juez volvió á pedir noticias al Gobernador, quien en 15 de noviembre manifestó que, versando la cuestión promovida sobre saber si existía ó no una servidumbre, cuyo predio sirviente pretendían los recurrentes fuese la propiedad de Sabun, se había desestimado la instancia del ayuntamiento, dejando á salvo su derecho para el uso que mejor le conviniese.

El juez, en su vista, pidió la autorización, que fué denegada por el Gobernador, previa audiencia del Consejo provincial, fundado en que el ayuntamiento de Fonz no obró maliciosamente, y solo por cumplir con un servicio público.

Considerando que, al habilitar el ayuntamiento de Fonz el camino que atravesaba por el monte de Figueroa, no lo verificó para usurpar á sabiendas derechos dominicales, ni con objeto de causar daños al propietario del monte, sino apoyado en un derecho que creía tener á la servidumbre de paso por dicha heredad:

Considerando que, bajo cualquier aspecto que se mire la cuestión, no puede producir mas que una reclamación civil; y que si el ayuntamiento se estralimitó de sus atribuciones, esta estralimitación fué gubernativamente corregida por el Gobernador, que era la única autoridad que podía hacerlo por tratarse de una falta de indole exclusivamente administrativa:

El Consejo opina pudiera V. E. servirse consultar á S. M. se confirme la negativa dada por el Gobernador de Huesca.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por el Consejo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de abril de 1857.—Nocedal.

Señor Gobernador de la provincia de Huesca.

—o—

#### MINISTERIO DE ESTADO.

##### Dirección de Comercio.

Para conocimiento del público se insertan á continuación los adjuntos decretos publicados por los Gobiernos de la Confederación argentina y de Buenos Aires.

#### CONFEDERACION ARGENTINA.

Publicamos á continuación el decreto, fecha 5 del corriente, modificando la ley sobre los derechos diferenciales, y al que

nos hemos referido en nuestro número anterior.

Departamento de Hacienda.—Paraná, enero 3 de 1857.—El vicepresidente de la Confederación argentina, en ejercicio del poder ejecutivo. Para mayor inteligencia y cumplimiento de la ley de 19 de julio del año anterior, que establece los derechos diferenciales, ha acordado y decreta:

Art. 1.º Los cabos de que habla la ley de 19 de julio son los de Santa María y San Antonio en la embocadura del Rio de la Plata.

Art. 2.º El comercio que se hace por la cordillera de los Andes está en el caso del art. 2.º de la ley en cuanto seguirá pagando únicamente el derecho ordinario.

Art. 3.º El citado art. 2.º de la ley no se opone á que los buques que vengán de cabos afuera, con destino á puertos de la Confederación, hagan escala en los puertos intermedios del Rio de la Plata.

Art. 4.º Pueden dichos buques traer carga para los puertos del Rio de la Plata y para otros de la Confederación, sin que este hecho, ni la descarga de la parte destinada á aquellos, haga incurrir á las mercaderías dirigidas á los de la Confederación en el pago de derechos diferenciales.

Art. 5.º Igualmente serán considerados con arreglo al art. 2.º de la ley las mercaderías procedentes de cabos afuera que, dirigidas á puertos del Rio de la Plata, fueren destinadas, ya sea todo el cargamento ó parte de él, á los de la Confederación sin haber descargado ó trasladados en aquellos.

Art. 6.º Por punto general todas las mercaderías que se introduzcan en la Confederación en buques que hayan tocado en puertos intermedios de cabos afuera serán sujetas á los derechos diferenciales siempre que los interesados no bagen constar claramente que se hallan comprendidos en los artículos 3.º, 4.º ó 5.º del presente decreto.

Art. 7.º Para facilitar el cumplimiento del artículo anterior, se autorizará al agente comercial argentino en Buenos Aires y cónsul general en Montevideo para que, en los casos expresados en dichos artículos 3.º, 4.º y 5.º, á solicitud de los interesados, espidan los certificados convenientes, previas todas las diligencias que fuesen necesarias para la plena averiguación del hecho que certifican.

Art. 8.º Comuníquese, y publíquese, y dese al registro nacional.—Carril.—José Miguel Galán.

#### DOCUMENTOS OFICIALES.

Ministerio de Hacienda.—Buenos Aires, enero 10 de 1857.—Considerando el gobierno las ventajas que reporta el país de su comercio de tránsito y la importancia de retenerlo ó aumentarlo en lo posible, y persuadido de que el espíritu de los legisladores es uniforme y pronunciado en favor de las franquicias comerciales, como el medio mas seguro de fomentar los intereses del país y acrecentar sus rentas, ha acordado y decreta:

Artículo 1.º Las mercaderías que en elante se manifiesten á su introducción para depósito general y se estraligan en tránsito dentro de los primeros doce meses de su depósito, serán libres del derecho de almacenaje y estingaje.

Art. 2.º Las mercaderías que se estraligen en tránsito después de vencidos dichos doce meses, solo adeudarán el derecho de almacenaje y estingaje sobre el excedente de aquel término.

Art. 3.º La franquicia que se concede por los artículos anteriores, no será extensiva á los artículos que se desechan para el consumo, los que seguirán adeudando el derecho de almacenaje y estingaje que establece la ley.

Art. 4.º El colector general queda autorizado para tomar en arriendo los almacenes de depósito que sean necesarios con arreglo á la demanda, debiendo cuidar que aquellos reúnan las mejores condiciones de comodidad, seguridad etc., y estableciendo en cada uno de ellos, de acuerdo con los alcaldes, un guarda-almacen permanente como está ordenado.

Art. 5.º En el caso de que la aduana, por falta de almacenes prontos, no pueda recibir todas las mercaderías que se soliciten depositar en almacenes generales, los interesados depositarán las mismas de su cuenta en almacenes particulares, hasta que aquella se hubiere proporcionado local donde puedan ser trasladadas dichas mercaderías, siendo entendido que los doce meses de franquicia, que puedan corresponder á las mismas, solo empezarán á contarse desde el día en que se verifique el traslado.

Art. 6.º Las mercaderías que por su volumen ó naturaleza se considera gravoso ó inconveniente recibir las en almacenes generales de Aduana continuarán, como hasta hoy, depositándose en almacenes particulares de cuenta de los interesados, con arreglo á la facultad que concede al gobierno el art. 25 de la ley de Aduana.

Art. 7.º El presente decreto será sometido en oportunidad á la aprobación de las III. CC. LL.

Art. 8.º Comuníquese al colector general y al receptor de la aduana de San Nicolás; publíquese é insértese en el registro oficial.—Obligado.—Norberto de la Riestra.

#### GOBIERNO MILITAR

##### DE LA PROVINCIA Y PLAZA DE CADIZ.

Capitana general de Andalucía.—E. M.—Orden general del 25 de abril de 1857 en Sevilla. El Excmo. Sr. ministro de la guerra con fecha 22 del actual comunica al Excmo. Sr. capitán general de distrito la Real orden siguiente:

Excmo. Sr.—La Reina (q. D. g.) ha tenido á bien mandar que los comandantes de infantería y caballería en situación de reemplazo que deseen ser empleador en las comisiones de estadísticas puedan desde luego solicitar así; en el concepto de que los que sean nombrados para este servicio disfrutarán el sueldo de sus empleos por completo, debiendo V. E. al remitir á este ministerio la relación de los respectivos á su distrito, expresar los que considere mas apropiados para el mencionado cargo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Lo que de orden de S. E. se hace saber en la general de este día para que llegue á conocimiento de los comandantes que se encuentran en situación de reemplazo en este distrito.

El coronel jefe de E. M.—J. Guillen Buzaran.—Laxala.

N. 553.

Don Carlos Heleón, abogado de los tribunales de la Nación, auditor honorario de Marina, juez de primera instancia del distrito de San Miguel de esta ciudad de Jerez de la Frontera, etc.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan José, y Pedro de la Vega y Espinola, para que en el término de treinta días, contados desde el en que se inserte esta convocatoria en la Gaceta del gobierno de Madrid, se presenten por sí, ó por personas con poder bastante, para que se entienda con ellos lo que se actúe en los autos de inventario á bienes de Pedro de la Vega, aperechados que no haciéndolo en el plazo designado, se entenderá el seguimiento de dichos autos con el promotor fiscal, y les parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en la ciudad de Jerez de la Frontera á 3 de abril de 1857.—*Cirilo Heleón*.—Por mandato de su señoría: Francisco de Paula Gonzalez.